



Modificación de la Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja, para establecer procedimiento abreviado para las solicitudes de renta de mujeres víctimas de violencia de género.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Medidas en el ámbito de los Servicios Sociales.

01.-COMPETENCIA:

El Estatuto de Autonomía de La Rioja atribuye a esta comunidad autónoma en su artículo 8. Uno. apartado 30 competencia exclusiva en asistencia y servicios sociales, y en el apartado 31, entre otras, competencia exclusiva en desarrollo comunitario, promoción e integración de los discapacitados, emigrantes, tercera edad y demás grupos sociales necesitados de especial protección.

En aplicación de estas competencias se dicta la Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales, que configura todos los servicios y prestaciones del Catálogo que la propia Ley crea, como auténticos derechos subjetivos, es decir, garantizándolos a los ciudadanos sin sujeción a la existencia o no de disponibilidad presupuestaria en el momento en el que se solicitan.

En desarrollo de la misma se dictó la Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja. La renta de ciudadanía se define como un derecho subjetivo reconocido a las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social. Su finalidad es atender las necesidades básicas del solicitante y su núcleo familiar de convivencia que se encuentren en esta situación y promover su inserción social y laboral.

02.-JUSTIFICACIÓN:

El artículo 55 de la Ley 11/2022, de 20 de septiembre, contra la Violencia de Género de La Rioja establece que:

“1. Reglamentariamente se establecerá un procedimiento abreviado para la tramitación, concesión y abono de la renta de ciudadanía a las mujeres víctimas de violencia de género, independientemente de su situación administrativa.

2. A este efecto, el reconocimiento del derecho a la prestación se efectuará en el plazo máximo de un mes desde la entrada de la solicitud acompañada de la acreditación de la condición de víctima de violencia de género, formulada por la interesada en el Registro del órgano competente para resolver.”

Si bien dicho artículo prevé que ese procedimiento se desarrolle reglamentariamente, se considera necesaria para su efectividad la modificación de la propia Ley de Renta de Ciudadanía, en concreto, en lo referente al artículo 7 e), así como fijar en dicha Ley el plazo máximo de resolución de estos expedientes.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 1 / 3
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2024/096012	Otros	Solicitudes y remisiones generales	2024/0740888
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Directora General de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad			
2			

03.- TEXTO A INCORPORAR

Visto lo anterior, se propone incorpora una Disposición adicional cuarta a la Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja, con la siguiente redacción:

“Disposición adicional cuarta. Procedimiento abreviado para las solicitudes de mujeres víctimas de violencia de género.

Se dará prioridad en la tramitación de esta prestación a las solicitudes de mujeres que acrediten ser víctimas de violencia de género.

En estos casos, no se exigirá en el momento de la solicitud el cumplimiento del requisito del artículo 7 e) de la Ley y el plazo máximo de resolución será de un mes desde la presentación de la solicitud de la prestación.”

04.- COSTE ECONÓMICO

El coste de la medida se cifra en un importe de **1.600 euros**.

Para la fijación de este importe se han tenido en cuenta los siguientes datos:

- a) Los expedientes en los que se acredite la condición de violencia de género verán reducido su plazo de resolución en un mes, respecto del plazo de resolución del régimen general, por lo que recibirán un mes más de prestación.
- b) Desde la puesta en marcha de la prestación de RC en el año 2017, han sido 69 las titulares de renta que han compatibilizado el cobro de esta prestación con la de RAI por Violencia de Género (único indicador disponible en el programa informático para poder realizar el estudio); si extrapolamos esta cifra a datos anuales estimamos un número de 10 solicitudes/año (69 solicitudes/7 años).
- c) Por último, para estas solicitudes, estimamos el importe de la mensualidad adicional que van a percibir en 160 euros, calculado en base a la media de las cuantías mínimas de RC en función de la composición de la unidad de convivencia, y teniendo en cuenta que la cuantía de RC se ve minorada por el importe de la RAIVG.

Atendiendo a todo lo anterior se estima un coste económico de dicha medida en:

$$\text{COSTE} = 1 \text{ mes adicional} \times 10 \text{ solicitudes} \times 160 \text{ euros/mes} = 1.600 \text{ euros.}$$

05.- IMPACTO DE GÉNERO

La modificación propuesta tiene un impacto de género directo, puesto que afecta únicamente a las mujeres solicitantes de renta de ciudadanía que acrediten la condición de víctima de violencia de género.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 2 / 3
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2024/096012	Otros	Solicitudes y remisiones generales	2024/0740888
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Directora General de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad			
2			

Dicho impacto puede quedar reflejado a nivel económico y social, puesto que al verse reducido el plazo de resolución en un mes, la cobertura va a llegar de manera más rápida y efectiva a este colectivo.

06.-TRÁMITE AUDIENCIA

El artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en el párrafo segundo de su punto 4:

“Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero.”

Atendiendo a lo dispuesto más arriba y visto el coste económico de la medida, queda justificado prescindir del trámite de consulta pública. El gasto estimado de RC para el año 2025 se prevé en 4.000.000 euros, siendo el coste estimado de la medida de 1.600 euros.

Por otro lado, la medida no impone obligaciones relevantes a los destinatarios, por el contrario, reduce el cumplimiento de requisitos de acceso al no exigir el cumplimiento del requisito dispuesto en el artículo 7 e) de la Ley 4/2017.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 3 / 3
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2024/096012	Otros	Solicitudes y remisiones generales	2024/0740888	
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora	
1 Directora General de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad				
2				